

# Crónica del mes

## Enero-febrero

El inicio de 1988 sorprendió al gobierno de Duarte sumido en una crisis galopante de hegemonía política, producto por una parte del impulso inercial conferido al proceso por tres años y medio de permanente y enconada confrontación entre el régimen demócrata cristiano y la inmensa mayoría de sectores sociales y políticos del país, y, por otra, de su enfrentamiento con el gran capital y los partidos de derecha en torno a la segunda fase de la reforma agraria y las discusiones sobre el presupuesto general de la nación y el Código Electoral, desarrolladas en la asamblea legislativa desde el mes anterior.

La cuestión del Código Electoral cobró relevancia especial, estando el país a las puertas de un nuevo evento electoral. Las discusiones en torno a dicho asunto llevaban más de un año (desde que los 33 diputados del PDC introdujeron diversas reformas a la ley electoral en diciembre de 1986), pero la premura que imponía la inminencia de los nuevos comicios legislativos y municipales del 20 de marzo hacía impostergable una definición sobre la legislación electoral. Así, después de varias sesiones plenarias infructuosas, la asamblea legislativa aprobó el 8 de enero el nuevo Código Electoral, por 24 votos del PDC y 10 del PCN, luego de que ambos partidos convinieran una componenda en virtud de la cual el PDC otorgaba su aprobación al código a cambio de los votos del PCN para la emisión de 100 millones de colones en bonos como

refuerzo al Presupuesto General de la Nación para 1987.

Una vez aprobado el Código Electoral, la mecánica del proceso siguió su curso. El 20 de enero, el Concejo Central de Elecciones (CCE) declaró oficialmente abierto el período para que los partidos contendientes desarrollaran sus respectivas propagandas, con la cual los medios de comunicación del país se transformaron de la noche a la mañana en la cloaca de una descomunal verborrea política plagada de demagogia, oportunismo y vituperios recíprocos. La campaña rebasó de tal manera el umbral de un civismo mínimo, que el propio mayor D'Aubuisson, candidato de ARENA a diputado por La Libertad, admitió que la población salvadoreña "ha perdido confianza en el proceso electoral y en los institutos políticos inscritos."

Como en los eventos electorales anteriores, el FMLN mantuvo invariable su decisión de boicotear los comicios en la "zonas de control revolucionario y áreas de disputa," aduciendo que las elecciones formaban parte del "proyecto de contrainsurgencia, llamado "guerra de baja intensidad," que combina genocidio con farsa electoral y que profundiza la dependencia nacional respecto de los intereses de los norteamericanos." Como corolario práctico de ello, Radio Venceremos formuló, el 18 de enero, un llamado para que "ciertos partidos políticos con vida democrática no se presenten al juego electoral." A

tales advertencias, el presidente del CCE, Dr. Mario Samayoa (PDC), respondió que las elecciones se desarrollarían bajo la modalidad de "votaciones departamentales y no municipales, donde la situación así lo requiera," aun cuando ello no sería el caso general, "ya que la Fuerza Armada protegerá todo el proceso electoral desde el inicio de la campaña proselitista, la movilización ciudadana y durante el mismo día del sufragio, de modo que difícilmente el FMLN impedirá la participación popular en los comicios."

Por su parte, Convergencia Democrática, integrada por el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), el Movimiento Popular Social Cristiano (MPSC) y el Partido Social Demócrata (PSD), mantuvo a lo largo del mes una postura de apertura flexible frente a la posibilidad de participar en los comicios y no anunció públicamente su decisión de no concurrir a ellos sino hasta el 28 de enero. Una semana antes, había retornado nuevamente al país Rubén Zamora (MPSC) y Héctor Oquelí (MNR), quienes manifestaron su disposición de "evaluar la situación pre-electoral y conversar con otras fuerzas políticas," a efecto de "ampliar los espacios políticos existentes en el país, que conlleven a la creación de mayores niveles de convergencia en el espectro político y que permitan encontrar soluciones políticas y negociadas a la guerra."

Por debajo de la superestructura de los preparativos electorales, los dinamismos de fondo del proceso político salvadoreño siguieron su curso. El deterioro de la situación económica propició nuevos enfrentamientos entre el gobierno y los sectores empresariales y laborales, y las llamas de la guerra siguieron devastando al país.

El principal frente de lucha entre el gobierno y los empresarios siguió siendo, coyunturalmente, la cuestión agraria. Tras la aprobación de dos de los cinco proyectos de ley contenidos en el paquete agrario que el gobierno

presentó en diciembre de 1987, el debate se polarizó en la Ley especial determinante del destino de las tierras rústicas excedentes de 245 hectáreas, la Ley de transferencia de la propiedad estatal rústica de vocación agropecuaria a favor de los beneficios de la reforma agraria, y la Ley de transferencia de tierras rústicas comprometidas con el sistema financiero en favor de los beneficiarios de la reforma agraria. Este último proyecto de ley suscitó de modo especial la oposición del gran capital, al punto que la Cámara de Comercio e Industria manifestó que, con él, el régimen democratacristiano no tenía otro propósito que el de "destruir toda iniciativa privada en el sector agrícola, para obtener ventajas políticas con propósitos eleccionarios y convertir en absoluto el control estatal sobre este sector." En el mismo marco de contraofensiva empresarial, también la Asociación de Ganaderos de El Salvador (AGES), la Asociación de Productores de Caña (PROCAÑA), la Asociación de Beneficiarios de Café (ABE-CAFE), la Asociación Cafetalera (ASCAFE), la Unión de Cooperativas de Cafetaleros (UCAFE) y la Asociación de Proveedores Agrícolas (APA), coincidieron en considerar el mencionado proyecto de la ley como "el más peligroso y destructivo" de los contemplados en el paquete agrario.

A despecho de las protestas del sector privado, el gobierno prosiguió la implementación de su política económica. El 15 de enero, los 33 diputados del PDC aprobaron la Ley General del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal de 1988, sobre la base del anteproyecto presentado a la comisión de hacienda y especial del presupuesto de la asamblea desde el 29 de septiembre de 1987. El nuevo presupuesto, por un monto de 3.505.877.620 colones incluía un incremento de 54.5 millones respecto del presupuesto de 1987, lo cual dio pie al gobierno para calificarlo como un presupuesto "antiinflacionario" que no contemplaba incrementos salariales para los empleados públicos y que reducía los gastos en inversión

real y reconstrucción. En la misma sesión legislativa, según el convenio acordado una semana antes con el PDC, los diputados del PCN presentaron sus votos para la aprobación de la emisión de bonos por 100 millones de colones para paliar parcialmente el déficit del presupuesto de 1987.

Mientras en el seno de la asamblea se discutían las perspectivas presupuestarias para 1988, la crisis económica siguió descargando sobre las espaldas de las mayorías populares el látigo de la inflación. Según informes oficiales proporcionados por la dirección de economía agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), entre enero de 1987 y enero de 1988, los precios del arroz y del frijol habrían experimentado incrementos del 55 y 58 por ciento, respectivamente. Los precios de otros productos de consumo básico experimentaron incrementos menores, pero en ningún caso inferiores al 11 por ciento. Adicionalmente, el 14 de enero, el presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) anunció que, debido a la nueva crisis energética inducida por la exigua precipitación pluvial del invierno anterior, y la consiguiente reducción en el nivel de los embalses de las tres principales hidroeléctricas del país, la CEL había diseñado un plan de emergencia que incluía tanto un racionamiento de la energía como alzas en las tarifas de dicho servicio.

La advertencia de que no habría incrementos salariales para los empleados públicos, junto a la escalada efectiva de la inflación, constituyeron estímulos suficientes para un relativo relanzamiento de la movilización laboral. En un esfuerzo por retomar la conducción hegemónica del descontento de los trabajadores, la UNTS anunció sus intenciones de propiciar un debate nacional para la discusión y proyección de un gobierno que contara con el consenso de todos los sectores patrióticos del país. En orden a este propósito, y con el objetivo de definir sus líneas generales de trabajo para 1988 y precisar su plataforma reivindicativa, realizó los días 8

y 9 de enero su quinta asamblea general de delegados, la cual contó con aproximadamente 600 participantes.

A un nivel de lucha reivindicativa más concreta, tres días después, ANDES entregó al nuevo Ministro de Educación, profesor Carlos Cruz Avalos, un pliego de 9 demandas, las cuales fueron recibidas por el funcionario con aparente mayor apertura y flexibilidad que las que el exministro Buendía Flores solía mostrar al gremio magisterial. Siempre en el sector público, la Asociación de Trabajadores del MAG (ANTMAG) denunció el despido de 45 trabajadores a finales de diciembre; mientras que en el ISSS, la junta directiva del sindicato (STISSS), electa a mediados de diciembre de 1987, encontró algunos problemas ante el Ministerio de Trabajo, a raíz de una impugnación presentada el 5 de enero por otros empleados del Seguro Social, aparentemente comprados por el Instituto Americano para el Desarrollo del Sindicalismo Libre (IADSL).

También el sector privado enfrentó diversos focos de conflictividad laboral. Los más relevantes fueron los paros del sindicato de las Industrias Mike-Mike, de los trabajadores de ARCITEX, de la filial de SOICSCES en la empresa constructora "Terracería, Pavimentación, Vivienda e Inversiones," y, sobre todo el del Sindicato General de Trabajadores de la Industria Pesquera y Actividades Conexas (SGTIPAC), miembro de la CGT, en diversas empresas del consorcio "Pezca, S.A. de C.V."

En el ámbito militar, el primer mes del año fue escenario de un renovado esfuerzo de la Fuerza Armada por tomar la iniciativa estratégica de la guerra de un modo sostenido. En los primeros días de enero, tropas de la Quinta Brigada de Infantería, apoyadas por unidades de artillería y caballería, iniciaron un fuerte operativo sobre la zona norte de San Vicente, en el área de San Esteban Catarina, Santa Clara, San Idelfonso, Las Aradillas, Cerros de San Pe-

dro, el Junquillal y San Felipe. Concomitantemente, el 5 de enero, la Fuerza Armada inauguró dos nuevas operaciones contrainsurgentes, denominadas "Plan Kilovatio" y "Fénix 14," encaminadas a contrarrestar la ofensiva guerrillera contra la infraestructura económica. Según fuentes castrenses, el "Plan Kilovatio" consiste en la dispersión de pequeñas unidades élites de choque encargadas de emboscar y "cazar" a los guerrilleros saboteadores; la "Fénix 14" pretendía ser continuación del ingente operativo iniciado en el cerro de Guazapa en enero de 1986, fue inaugurada con un fuerte bombardeo sobre presuntas posiciones guerrilleras localizadas en el cerro, así como en todo el norte de San Salvador y en las inmediaciones de Suchitoto (Cuscatlán). Ambas operaciones, según COPREFA, aspiraban a involucrar al 70 por ciento del total de efectivos de la Fuerza Armada.

Como resultado de las operaciones, tanto las faldas del volcán de San Salvador como toda el área norte del departamento, consideradas corredores logísticos del FMLN hacia el cerro de Guazapa y otros lugares estratégicos en los departamentos de Cuscatlán, Chalatenango y el Norte de La Libertad, fueron saturadas de tropas gubernamentales. Pronto se suscitaron diversos combates en Nejapa, al norte de la capital, así como en Ilobasco, San Isidro y Cinquera, en Cabañas; Suchitoto y San José de Guayabal, en Cuscatlán; Nueva Concepción, en Chalatenango; y San Pedro Tacachico, en La Libertad. Paralelamente, también en la zona oriental se registraban diversos enfrentamientos en Jucuapa y Nueva Granada, en Usulután; San Gerardo, en San Miguel; y Cerro Cahuatique, en Morazán.

El despliegue de tropas gubernamentales, empero, no logró neutralizar la actividad de sabotaje. El 1 de enero, unidades guerrilleras incursionaron al beneficio Acahuapa, de San Cayetano Istepeque (San Vicente), donde destruyeron, según el administrador del lugar, 10 mil quintales de café pergamino y

7.200 en cereza, y quemaron 3 camiones, 13 secadoras del grano y gran cantidad de café listo para ser exportado, provocando pérdidas que Radio Venceremos estimó en más de 1.6 millones de dólares. Tres días después, fuerzas insurgentes ocuparon la pista de aterrizaje de El Pajal, en el cantón Primavera de El Tránsito (San Miguel), destruyeron 2 bodegas de insumos y herramientas y 9 graneros con cereales e incendiaron una plantación de caña de azúcar contigua al lugar. El 5 de enero, otro grupo guerrillero incursionó la cooperativa La Unión, de Santiago Texacuangos, en el sur del departamento de San Salvador, donde destruyó una máquina procesadora y quemó 60 quintales de café en oro y 20 en uva. La CEL, por su parte, el 4 de enero, informó de la destrucción de 8 torres de 4 líneas de transmisión, 14 postes de 4 líneas de subtransmisión y gran cantidad de postes y transformadores de la red nacional de distribución, a resultas de lo cual quedaron temporalmente fuera de servicio las líneas de distribución primaria del Cerrón Grande-Nejapa, Opico-Nejapa, San Antonio Abad-Nuevo Cuscatlán y Central 15 de Septiembre-San Miguel.

Tampoco la actividad de desgaste contra la Fuerza Armada disminuyó sensiblemente. El 5 de enero, unidades rebeldes atacaron fuertemente las posiciones militares del puesto fronterizo de El Poy (Chalatenango), dejando un saldo de 3 soldados y 1 guerrillero muerto y 7 efectivos del batallón Cayaguañca heridos. Tres días después, unidades milicianas atacaron posiciones de la defensa civil localizadas en San Ramón, Mejicanos, en la periferia norte de la capital. Más tarde, el 13 de enero, fuerzas guerrilleras del frente paracentral "Anastasio Aquino" atacaron la base militar de la Quinta Brigada de Infantería en San Emigdio, en las faldas del volcán Chinchontepec (San Vicente), al tiempo que otras unidades rebeldes emboscaban a una patrulla militar que se movilizaba en las cercanías de Tejutla (Chalatenango). Por otra parte, el 11 de enero, un



helicóptero UH-1H se precipitó a tierra en el cantón Los Meléndez de San José de Guayabal (Cuscatlán), en el marco del operativo "Fénix 14." En el percance murieron 2 subtenientes y 1 soldado artillero y resultaron heridos 1 cabo y 1 soldado más. Radio Venceremos aseguró que unidades del FMLN derribaron el aparato cuando éste volaba a poca altura sobre la zona. Algunos voceros castrenses atribuyeron el accidente a fallas mecánicas del aparato; sin embargo, otras fuentes militares, incluido el ministerio de defensa, general Carlos Vides Casanova, no descartaron la posibilidad de que "una ráfaga de ametralladora de la guerrilla pudo haber impactado y derribado la nave." Con todo, la acción más importante del FMLN durante la primera quincena de enero habría sido el ataque efectuado el día 15 contra las posiciones del batallón Oromontique, acantonado en Cerro El Mono, en Jucuarán (Usulután). Según el coronel Inocente Montano, comandante de la Sexta Brigada de Infantería, el ataque habría sido efectuado por unos 150 combatientes de las fuerzas especiales del ERP, quienes utilizaron fuego de fusilería y ametralladoras medianas y pesadas, con el objetivo de distraer al ejército y facilitar un desembarco de armas y hombres en Punta Jucuarán. Según las fuentes oficiales, el saldo del ataque habría sido 25 guerrilleros y 7 soldados muertos y otros 13 efectivos castrenses heridos.

El ritmo de la actividad bélica durante la segunda quincena de enero no manifestó ninguna variación notoria. La Fuerza Armada no sólo mantuvo las operaciones militares impulsadas en el sur de Usulután, sino que incluso las reforzó y extendió a las zonas costeras de San Miguel y parte de la Unión. A la vez, las movilizaciones de rastreo en las áreas del volcán de San Salvador y toda la zona norte del departamento, así como las desarrolladas en la periferia del cerro de Guazapa y en Chalatenango, se mantuvieron inalteradas. Adicionalmente, a partir del 19 de enero, el ejército intensificó sus opera-

ciones en el norte de Santa Ana, extendiéndolas a todos los puntos considerados como zonas de expansión guerrillera en dicho departamento. Ese día, se registraron fuertes enfrentamientos en la zona boscosa de Montecristo, cantón Monte del Padre, de Metapán, entre guerrilleros del frente occidental "Feliciano Ama" y unidades de la Segunda Brigada de Infantería.

Tras el ataque guerrillero del día 15 a las posiciones del batallón Oromontique, la Fuerza Armada intensificó sus operaciones de rastreo en torno al Cerro el Mono. Simultáneamente, tropas especiales de infantería de la Marina Nacional, con apoyo de helicópteros artillados, lanchas de desembarque y unidades de la Sexta Brigada de Infantería, y de los batallones Atonal y de Cazadores, emprendieron una serie de operaciones en toda la zona costera de Usulután, en orden a desarticular a las fuerzas guerrilleras operantes en la zona e imposibilitar los presuntos desembarcos de armas provenientes de Nicaragua. El comando de la Tercera Brigada de Infantería informó que, durante el desarrollo de los operativos, el 19 de enero, las tropas desmantelaron dos campamentos de las FAL establecidos en los manglares de San José, en Jucuarán, en los cuales funcionaban una clínica de campaña y dos talleres de fabricación de explosivos y de reparación de armas. Mientras tanto, como fruto del accionar castrense, recias batallas se habrían librado en Gualococti (Morazán) entre tropas de los batallones Lenca y Morazán, del Destacamento Militar Número Cuatro, y columnas guerrilleras del ERP.

El 22 de enero, durante las operaciones de rastreo llevadas a cabo por tropas del batallón aerotransportado en Chalatenango, se suscitó un recio enfrentamiento en Sitio Cachito, de Nueva Concepción. Por otra parte, a 20 días de haberse iniciado la "Fénix 14," el coronel Mauricio Vargas, jefe de operaciones del Estado Mayor, informó que en el curso de ella el ejército había infligido 12 bajas al FMLN y sufrido 37 en sus propias

filas. Asimismo, Vargas informó que, durante el operativo, la Fuerza Armada había llevado a cabo 40 combates de encuentro, 562 misiones de seguridad y 3.473 patrullajes, y había desmantelado 3 campamentos guerrilleros. Posteriormente, el 26 de enero, tropas aerotransportadas bajo el comando de la Segunda Brigada de Infantería, desmantelaron otro campamento rebelde en la jurisdicción de Santa Rosa Guachipilín, en el norte de Santa Ana. El mismo día, efectivos del Batallón Arce desmantelaron otro campamento en la finca Los Jiménez, de Jucuapa (Usulután).

Por su parte, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, el FMLN empezó a dar muestras de que sus amenazas de boicotear las elecciones no eran puramente retóricas. El 19 de enero, un contingente guerrillero atacó las posiciones militares de Agua Caliente (Chalatenango), destruyendo los locales de ANTEL y de la alcaldía. Un día después, fuerzas guerrilleras que incursionaron la población de Chilanga (Morazán), dinamitaron los respectivos locales de la alcaldía y ANTEL. Más tarde, el 21 de enero, otras unidades rebeldes penetraron en la población de Mercedes La Ceiba (La Paz), donde destruyeron ANTEL, la alcaldía y las instalaciones de la comandancia local. Otras oficinas públicas destruidas en el mismo período habrían sido ANTEL y la alcaldía de Comalapa; las instalaciones de los juzgados, la alcaldía y ANTEL de Dulce Nombre de María y las oficinas públicas de San Francisco Morazán, en Chalatenango. Asimismo, entre el 25 y 26 de enero, el FMLN llevó a cabo una serie de acciones de sabotaje contra tres líneas de transmisión de 115 mil voltios correspondientes a las centrales hidroeléctricas del Cerrón Grande, "5 de Noviembre" y "15 de Septiembre," dejando sin energía eléctrica los departamentos de San Vicente, Cabañas, Cuscatlán y parte de San Salvador. Por otra parte, el 26, Radio Venceremos aseguró que fuerzas del frente central "Modesto Ramírez" habían derribado otro

helicóptero UH-1H. Durante la última semana del mes, se informó de fuertes combates en Jucuapa (Usulután), Chinameca (San Miguel), Nueva Concepción y San José Las Flores (Chalatenango) y en otros poblados de La Paz y Cuscatlán.

Al ofrecer un balance global de la actividad militar en el mes de enero, la oficina de relaciones públicas del ministerio de defensa informó que 79 guerrilleros y 48 soldados habían muerto. Asimismo, aseguró que la Fuerza Armada incautó al FMLN 74 fusiles, 2 ametralladoras, un lanzagranadas M-79, un lanzacohetes LOWE, 148 trampas explosivas, 38 granadas fragmentarias, 2 radios de comunicación militar y abundante munición. Por su parte, Radio Venceremos aseguró que el FMLN causó al ejército, en el mismo mes, 456 bajas entre ellas un capitán, 3 tenientes, 2 sub-tenientes y 2 oficiales pilotos. La emisora aseguró, además, que el FMLN incautó 31 fusiles, un mortero, 5 lanzagranadas, 6 radios de comunicación militar, 6 minas M-18, 61 mochilas, 6 armas cortas y munición.

A nivel regional, el acontecimiento más relevante del mes de enero lo constituyó la cumbre de presidentes centroamericanos realizada en San José los días 15 y 16 para evaluar los frutos de Esquipulas II a 150 días de suscritos los acuerdos.

La cumbre fue precedida por la gira que entre el 4 y 10 de enero efectuó por la región una misión *ad hoc* designada por la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento (CIVS) de los acuerdos, con el propósito de "recabar información directa del mayor número de fuentes posibles" para evaluar la implementación de Esquipulas II en el área. La misión emprendió su gira por el istmo el 4 de enero, en San José, visitando el 5 y 6 Managua, el 7 Guatemala y el 8 Tegucigalpa, para finalizar su periplo el 9 y 10 en El Salvador. La agenda que la misión desarrolló en cada uno de los países fue sumamente apretada y comprendió reuniones

con diferentes sectores sociales y políticos de cada nación —representantes del gobierno, partidos de oposición comisiones gubernamentales y no gubernamentales de derechos humanos, organizaciones obreras, campesinas y profesionales, etc.— así como con las respectivas comisiones nacionales de reconciliación.

En el caso particular de El Salvador, la misión *ad hoc* procuró a tal punto recoger con la mayor fidelidad posible que la premura de su estadía le permitía la opinión de distintas fuerzas sociales y políticas no gubernamentales, que el gobierno de Duarte opinó, por boca de diversos funcionarios, entre ellos el nuevo ministro de cultura, Roberto Viera, que el informe de la CIVS no sería "objetivo ni profundo" porque la misión *ad hoc* no había concedido el "tiempo necesario" a los representantes gubernamentales, prefiriendo escuchar a los sectores de oposición. En la misma línea de Viera, el ministro de defensa, general Carlos Vides Casanova, expresó: "percibí cierta inclinación en la misión internacional por conocer los aspectos negativos que presentó la oposición, más que los puntos de vista y los avances realizados por el gobierno." Al propio tiempo, Vides auguró que las conclusiones del informe seguramente serían "parcializadas a favor de Nicaragua." Naturalmente, los sectores de oposición fueron de opinión distinta. La UNTS, por ejemplo, tras reunirse con la misión el 9 de enero, presentó a ésta un amplio documento con "pruebas contundentes sobre el incumplimiento de Duarte a los compromisos adquiridos al firmar Esquipulas II."

Con la información recabada *in situ* en los cinco países centroamericanos, la misión verificadora se trasladó a Panamá, donde, el 11 de enero, se reunió con los miembros titulares de la CIVS para iniciar la elaboración de su informe final. Los días 12 y 13 se incorporaron a esta tarea los cinco cancilleres centroamericanos, a efecto de transformar el informe en un escrito que sirviera de

documento de trabajo a los mandatarios que se reunirían el 15 en San José. En conjunto, el informe resultó predominantemente optimista, aun cuando admitía que "el cumplimiento simultáneo de los acuerdos es un problema de fondo y urgente que aún no está resuelto." Sobre esta base, los presidentes iniciaron el día 15 la cumbre evaluativa de Esquipulas II.

Pese al talante fundamentalmente positivo del informe de la CIVS, el clima que precedió a la cumbre estuvo cargado de tensiones. Como siempre, las tensiones dimanaron principalmente de la postura intervencionista del gobierno de Reagan. Paralelamente a la gira de la CIVS por la región, el embajador especial de la Casa Blanca para Centroamérica, Morris Busby, efectuó, entre el 4 y 6 de enero, una visita relámpago por Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Apenas regresó a Estados Unidos, Busby emprendió, entre el 7 y 8 de enero, una nueva gira por los mismos países, pero esta vez acompañado del nuevo asesor de seguridad nacional, teniente coronel Collin Powell; del Secretario de Defensa Adjunto para América Latina, Robert Pastorino; y del Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Latinoamericanos, Elliott Abrams. El propósito de esta última visita habría sido, según la prensa norteamericana, advertir "a los cuatro presidentes que podrían enfrentar en un futuro cercano serios problemas políticos y económicos si el Congreso deja de ayudar a los contras." El propio vocero de la Casa Blanca Marlin Fitzwater, confirmó las versiones de la prensa, al indicar que "las palabras del teniente coronel Collin Powell no deben interpretarse como una amenaza. Simplemente queríamos que los presidentes de esos países estuvieran al tanto de la situación al acercarse el punto crucial de su reunión." Por su lado, tanto el presidente Duarte como el canciller Ricardo Acevedo Peralta contribuyeron decididamente a aumentar las tensiones en la región al lanzar toda clase de acusaciones irres-

ponsables sobre el presunto incumplimiento de Esquipulas II por parte de Nicaragua.

El primer día de la cumbre transcurrió en medio de agrias acusaciones y críticas mutuas que terminaron por empantanar las discusiones y confrontar a los presidentes. El 16, en cambio, las conversaciones avanzaron de manera acelerada y productiva. Este desbloqueo fue propiciado por el ofrecimiento de Daniel Ortega de levantar el estado de emergencia, ampliar la amnistía para los presos políticos y entablar con los "contras" un diálogo de orden técnico para concertar el cese de hostilidades. Pocas horas después de la lección de flexibilidad política en aras de la paz dada por Ortega, los cinco mandatarios suscribieron una declaración conjunta en la cual se comprometieron a cumplir "inmediatamente en forma pública y evidente" y de modo "total e inexcusable" aquellos compromisos enunciados en el documento de Esquipulas II a los cuales no se había dado efectiva implementación hasta ese momento.

En lo que respecta al mes de febrero, se mantuvieron operantes todos los dinamismos evidenciados durante enero, si bien cada vez más sobredeterminados, a nivel nacional, por la proximidad de las elecciones.

El Concejo Central de Elecciones (CCE) llevó adelante los preparativos formales de los comicios. El 5 de febrero, quedó cerrado el período de inscripción para los candidatos a diputados y a los concejos municipales. Dicho día se presentaron a la junta electoral departamental de San Salvador para formalizar la inscripción de sus candidaturas a alcalde capitalino, el Dr. Armando Calderón Sol, postulado por la coalición integrada por ARENA, Liberación, PAISA y el PPS; y el Lic. Carlos Remberto González, nominado por el PCN. El día anterior se había inscrito Alejandro Duarte, candidato por el PDC. En realidad, el Código Electoral estipulaba que el cierre del período de inscripción debía efectuarse 30 días antes de las elecciones (esto es, el 20 de febrero), pero en vista de que

la empresa impresora de las papeletas de votación requería por lo menos de 45 días para elaborarlas, el período se cerró el 5 de febrero. El día 20, el proceso entró a su recta final, con la apertura de la campaña para los concejos municipales. Al mismo tiempo, el CCE empezó a pedir al PDC, ARENA y PCN que enviaran a la mayor brevedad sus respectivas nóminas para conformar las casi 7 mil juntas receptoras de votos que serían distribuidas por todo el país. Por su parte, la asamblea legislativa prorrogó por 4 días más, hasta el 22 de febrero, el plazo para que los candidatos presentaran la documentación requerida para su inscripción, particularmente las solvencias extendidas por la Corte de Cuentas y el Ministerio de Hacienda.

Mientras tanto, la polémica propagandística entre ARENA y el PDC adquirió tales connotaciones de insulto abierto y desaforado, que el 12 de febrero, los dirigentes de ARENA, Lic. Alfredo Cristiani y Dr. José Francisco Guerrero, presentaron ante el CCE una demanda contra la "campaña de injurias" desarrollada por el PDC en detrimento de la imagen de ARENA. La demanda contemplaba dos puntos básicos. Por un lado, exigía la "suspensión de la campaña de descrédito y calumnias" desencadenada por el PDC contra diversas figuras de ARENA, en particular el mayor D'Aubuisson, a base de video-cassettes y fotografías arregladas mediante las cuales se les pretendía vincular con el "caso de los secuestros." Asimismo, la demanda exhortaba al CCE a sancionar al Ministro de Cultura, Roberto Viera, por haber asumido la conducción de la campaña demócratacristiana sin haberse exonerado formalmente del cargo ministerial.

A su vez, en respuesta a la iniciativa de ARENA, el Dr. Guillermo Guevara Lacayo y el propio Viera entregaron el 15 de febrero una contrademanda al CCE "que mande suspender la campaña difamatoria de ARENA, porque acusan a funcionarios de gobierno de situaciones que podrían calificarse de delitos." En relación al segundo aspecto de la de-



manda de ARENA, Viera aseguró que "nunca he utilizado los recursos materiales, financieros ni humanos del Ministerio de Cultura y Comunicaciones; tampoco he usado mi calidad de funcionario de gobierno en las intervenciones políticas." Mientras el Consejo estudiaba la demanda de ARENA y la contrademanda del PDC, ambos partidos prosiguieron el virulento intercambio de acusaciones. El 17 de febrero, airado por las acusaciones demócratacristianas que lo vinculaban a la banda de secuestradores jefada por su excuñado López Sibrián, el mayor D'Aubuisson contraatacó inmiscuyendo una vez más en el asunto al Ministro de la Presidencia, coronel Reynaldo López Nuila, al tiempo que demandó del general Vides Casanova que explicara por qué estaban en poder del PDC las fotografías que la Policía Nacional y los "asesores" del Instituto Venezolano de Educación Política (IVEPO) decomisaron el 1 de abril de 1986 en la casa del exdirigente de ARENA, Víctor Cornejo Arango, comprometido también en los secuestros.

El 18, en presencia de los miembros del CCE y de representantes de los partidos Acción Democrática (AD) y Liberación, las dirigencias de ARENA y del PDC acordaron un "pacto de caballeros" en virtud del cual se comprometieron "voluntariamente" a suspender a partir del día siguiente la propaganda de "ataques, ofensas, injurias, utilización de colores, lemas o figuras de candidatos" y convinieron en proseguir la campaña "dentro de los términos legales y de altura cívica." Pese al "pacto de caballeros," la campaña no dio muestras de cobrar tal altura cívica. A los pocos días, ARENA y el PDC estaban violentamente enfrascados en una nueva ronda de improperios, desatada esta vez por las acusaciones de ARENA acerca del presunto negocio que la democracia cristiana estaba montando con los 500 millones de dólares enviados anualmente por Estados Unidos para financiar la guerra.

El clima político estaba demasiado cal-

deado y polarizado en torno a esta polémica propagandística como para que los agentes políticos prestaran suficiente atención a la nueva propuesta de diálogo que el FMLN-FDR remitió el 5 de febrero al presidente Duarte por intermedio del obispo auxiliar de San Salvador. La propuesta, suscrita por el Dr. Guillermo Ungo, a nombre del comité ejecutivo del FDR, y por el comandante Shafick Handal, en representación de la comandancia general del FMLN, sugería realizar el 22 de febrero un encuentro de las comisiones mixtas de cese del fuego y de otros puntos de esquipulas II, cuya integración fue acordada en la ronda de diálogo realizada en la nunciatura en octubre de 1987.

La primera respuesta gubernamental a la iniciativa rebelde provino del Ministro de Cultura, Roberto Viera, quien calificó de "improbable" una nueva ronda de diálogo con el FMLN-FDR antes de los comicios. Dos días después, de modo más tajante, el propio Duarte manifestó que "ya dialogué demasiado con los alzados en armas y siempre les he pedido, les he suplicado, les he hablado y los he llamado a que abandonen la violencia y no lo quieren hacer. Ya no tiene sentido seguir hablando mientras el FMLN-FDR no tome una decisión y no acepten incorporarse al proceso democrático; no tiene sentido seguir dialogando si no se va a conseguir ningún objetivo y para seguir con diálogos tácticos no voy a seguir haciéndolo." Otros sectores políticos participantes en el proceso electoral, como el PCN, opinaron, por su parte, que la reanudación del proceso de diálogo era necesaria, pero no oportuna en ese momento de campaña electoral.

La preocupación por el diálogo, en cambio, siguió operante en diversas fuerzas sociales para las cuales todo momento es oportuno si el propósito consiste en buscar una solución política al conflicto. El mejor ejemplo de esta preocupación lo constituyó el "Primer foro nacional por la paz," realizado los días 5 y 6 de febrero en las instalaciones de la UCA por convocatoria de la UNTS, la Universidad de

El Salvador, el Partido Social Demócrata, la Unidad Comunal de El Salvador (UCES), la Asociación de Trabajadores del Arte y la Cultura (ASTAC) y el Movimiento por el Arte y la Identidad Cultural de El Salvador (MAICES). En el evento participaron organizaciones políticas, laborales, comunales, académicas y culturales, presentando su propia reflexión en torno al conflicto, sus orígenes, su estado actual y las posibles tareas políticas de las fuerzas sociales en la construcción de la paz. Una vez más, como en eventos anteriores de esta índole, los participantes en el foro coincidieron en la denuncia del sometimiento del gobierno salvadoreño a las directrices políticas del gobierno de Reagan, y en la urgencia de conformar un gobierno de consenso nacional capaz de alcanzar la paz por la vía del diálogo y la negociación.

El curso de los preparativos electorales pudo haber distraído la atención de la conflictividad laboral, pero no impidió el desarrollo de diversos focos reivindicativos. Desde principios del mes, el 1 de febrero, el Sindicato de la Industria Eléctrica (SIES) decretó un paro laboral en la Compañía de Alumbrado Eléctrico de San Salvador (CAESS) como "medida de presión y advertencia" a CEL para que ésta negociara el pliego de demandas presentado por el sindicato desde el 31 de octubre de 1987 en solicitud de un aumento salarial y mejores prestaciones socio-laborales. Más tarde, el 4 de febrero, la Asociación General de Empleados del Ministerio de Hacienda (AGEMHA) realizó un paro de labores en protesta por la "negligencia de los titulares de Hacienda al no querer discutir la plataforma reivindicativa de los trabajadores" y por la suspensión durante cinco días laborales de su secretario general, Jorge López, por haberse dedicado a actividades sindicales en horas de trabajo, según adujo la patronal. El 25 de febrero, el Sindicato de la Lotería Nacional de Beneficencia (SITRALONB), junto a la Asociación de Expen-

dedores de Billetes (ASEBIL) se declararon en paro indefinido hasta que las instalaciones de la institución fueran desmilitarizadas por los agentes de la Policía de Hacienda quienes las ocuparon desde el día anterior a petición del presidente de la Lotería, Lic. Abraham Valencia Morales, según lo denunciaron los sindicalistas. Asimismo, éstos manifestaron que el foco del conflicto lo constituía el incumplimiento de varias cláusulas del contrato vigente por parte de la patronal, mientras que el Lic. Valencia calificó de "politizadas" algunas de las demandas formuladas por los huelguistas.

En el mismo marco, el 26 de febrero, organizaciones laborales cercanas al Comité Coordinador de Trabajadores Estatales y Municipales (CCTEM) realizaron simultáneamente un paro de labores de 4 horas en el Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el Ministerio de Hacienda, en el de Cultura y Comunicaciones, en el de Educación, en ANTEL, INPEP, Lotería Nacional, IVU y alcaldía de San Salvador. Según declaraciones de Saúl Sánchez, dirigente del CCTEM, la medida contó con el apoyo de unos 50 mil trabajadores en demanda de aumentos salariales, dos aguinaldos anuales, aumento de seguro de vida, recontractación de despedidos, creación de una ley de estabilidad del empleo público y municipal, construcción y equipamiento de un hospital para los mismos, y audiencia para que una delegación de sindicalistas negociara las demandas.

En el sector privado, además de la prolongación del conflicto sostenido por el sindicato de "Pezca, S.A." en el puerto El Triunfo, el paro laboral más relevante durante el mes fue el decretado a partir del 10 de febrero por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica Básica (STIMB) en Talleres Sarti, en protesta por la militarización de las instalaciones de la empresa a raíz de las tensas relaciones del sindicato con la patronal por diversos problemas laborales.

También en el ámbito laboral, aunque en una línea distinta, se destacó, a principio de febrero, el incidente que protagonizaron, por un lado, los dirigentes laborales Ramón Aristides Mendoza y Francisco Zaldaña, y, por otro, Samuel Maldonado y Arturo Magaña, en su pugna por asumir la dirigencia de la Unión Comunal Salvadoreña (UCS). El enfrentamiento explotó a raíz del fallo que la Corte Suprema de Justicia emitió el 2 de febrero en favor de un recurso de amparo presentado por la fracción encabezada por Mendoza, solicitando se invalidara la directiva presidida por Samuel Maldonado, la cual, a su vez, contaba con el aval del Ministerio del Interior. Amparado en el fallo Mendoza, se presentó el 5 de febrero, acompañado por unos 150 simpatizantes, a la sede de la UCS en Santa Tecla, exigiendo a la directiva de Maldonado la entrega del local. La respuesta negativa de este último suscitó una acalorada discusión la cual condujo a un enfrentamiento armado entre los seguidores de ambas fracciones. Con todo, el fuego de armas cortas no se prolongó por mucho tiempo, y la riña terminó con la intervención de agentes de los cuerpos de seguridad, quienes clausuraron el local para evitar futuros enfrentamientos.

En el campo militar, aun cuando la presión ejercida por la Fuerza Armada sobre las zonas de influencia rebelde menguó en alguna medida durante la primera quincena del mes, dicha reducción no fue lo suficiente significativa como para alterar sustancialmente el ritmo de la guerra. En el curso de las primeras dos semanas del mes, se registraron diversos enfrentamientos al norte del río Torola (Morazán), Lolotique y San Luis de la Reina (San Miguel), Jucuarán (Usulután), Santa Clara (San Vicente), Arcatao, El Carrizal y San José Las Flores (Chalatenango), Nejapa (San Salvador) y Coatepeque (Santa Ana). El FMLN, por su parte, llevó a cabo una buena cantidad de hostigamientos a posiciones militares. El 9 de febrero, fuerzas rebeldes atacaron las posi-

ciones del batallón Pantera, de la Policía Nacional, localizadas en Suchitoto (Cuscatlán). Ese mismo día, unidades guerrilleras emboscaron con minas a un camión de la Guardia Nacional en las cercanías del puente Cañas, en Apopa, al norte de San Salvador, con un saldo de 7 efectivos gubernamentales heridos. Más tarde, el 12, Radio Venceremos aseguró que unidades insurgentes causaron 8 bajas mortales al ejército en el curso de una emboscada realizada en San Vicente. Este día, otras fuerzas guerrilleras sabotearon la finca EL Naranja, de Metapán (Santa Ana), donde destruyeron 3.500 plantas de café, 7 bombas de fumigación, 2 básculas y 15 sacos de café.

Conforme fue corriendo el mes en dirección del evento electoral, la tensión de la guerra fue experimentando un relativo desplazamiento hacia la capital. Por una parte, el FMLN mantuvo su ritmo de pequeños hostigamientos militares, emboscadas menores a efectivos de los cuerpos de seguridad y acciones de sabotaje al sistema eléctrico en San Salvador. Por su lado, la Fuerza Armada empezó a intensificar los patrullajes en previsión de posibles golpes que la guerrilla podía lanzar para entorpecer el proceso electoral, según lo había venido advirtiendo. En orden a ello, tropas especiales de contrainsurgencia de la Guardia Nacional, Policía Nacional y Policía de Hacienda, con apoyo de unidades mecanizadas, se dedicaron a realizar operativos de sorpresa en varios puntos de San Salvador. Otros contingentes combinados hicieron, en diversos sectores de la ciudad, una serie de cateos y registros en busca de posibles casas de seguridad o células guerrilleras, mientras retenes con efectivos de diversas guarniciones militares eran montados en cada una de las arterias de acceso a la capital con el fin de realizar cateos en las unidades del transporte público interdepartamental y controlar cualquier movimiento de armas u hombres del FMLN.

Entrada la segunda quincena de febrero, el

FMLN renovó esfuerzos para hacerse con la iniciativa táctica de la guerra, que la Fuerza Armada parecía estar asumiendo. El día 17, columnas rebeldes combinadas con unidades de armas de apoyo, de la milicia, guerrillas clandestinas y comandos urbanos efectuaron la primera operación insurgente de gran envergadura en el año. La operación consistió en una maniobra regional con ataques simultáneos a posiciones militares y objetivos de sabotaje, y fue denominada "Muerte a los asesinos de Herbert Anaya Sanabria." Con dicha maniobra, el FMLN inauguró su primera campaña militar de 1988, denominada "La lucha armada y la organización combativa es la alternativa ante la nueva farsa electoral." Los ataques guerrilleros a las posiciones militares se registraron simultáneamente en los departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán, Cabañas y Cuscatlán, pero el principal foco de los hostigamientos lo constituyó el cuartel de la Sexta Brigada de Infantería, con sede en Usulután, el cual fue parcialmente destruido. Según fuentes castrenses, el ataque habría sido ejecutado por unos 300 insurgentes, los cuales utilizaron fuego de fusilería y artillería mediana. Según el parte de guerra rebelde, en el contexto de las maniobras militares, el FMLN causó 7 bajas a tropas del Destacamento Militar Número Cuatro tras un ataque a sus posiciones en Cacaopera y Osicala (Morazán). Entretanto, el batallón de contrainsurgencia Cuscatlán sufrió 18 bajas cuando unidades insurgentes hostigaron sus posiciones establecidas en la localidad de Carolina (San Miguel). El FMLN también atacó los puestos militares de San José Guayabal (Cuscatlán); del caserío Valle Nuevo, de El Paraíso (Chalatenango); y de Tejutepeque (Cabañas).

Según el informe rebelde, el resultado final de los combates habría arrojado un total de 215 bajas castrenses, de las cuales 190 fueron causadas en el ataque al cuartel de la Sexta Brigada. Asimismo, el FMLN aseguró haber destruido tres camiones militares y dañado parcialmente el helipuerto. Además,

fueron saboteados los puentes Vado Marín, sobre el río Grande de San Miguel, y Palo Seco, ubicado sobre la carretera del Litoral, a la altura de Jiquilisco (Usulután). Según el informe guerrillero, las posiciones castrenses que custodiaban la vía férrea de FENADESAL también fueron atacadas. Las fuentes aseguraron que la fábrica de aceite PROBASAL, en Jiquilisco, y la subestación eléctrica de Villa El Triunfo (Usulután) fueron totalmente destruidas. A la vez, en las instalaciones del beneficio algodonero de la cooperativa El Martillo, en Jiquilisco, fueron saboteadas y quemadas 12 de sus bodegas de almacenamiento que contenían unas 52 mil pacas de algodón. También fueron saboteadas las instalaciones de la hacienda La Carrera, en la misma jurisdicción. Unidades de zapadores volaron dos torres de Usulután, una en San Miguel y gran cantidad de postes del sistema secundario de energía eléctrica en toda la zona oriental. Por su parte, comandos urbanos sabotearon una central distribuidora de energía en la ciudad de San Miguel.

Un día después de haber inaugurado su campaña militar, el FMLN atacó con fuego combinado de artillería y fusilería las posiciones castrenses de La Laguna (Chalatenango). Más tarde, el 19 de febrero, se registraron fuertes combates en el caserío Los Cáceres, de Suchitoto (Cuscatlán); en Apastepeque y entre los cerros Teconal y Las Delicias, en San Vicente. El mismo día, fuerzas guerrilleras atacaron el puesto de la defensa civil de San Jorge (San Miguel), donde destruyeron las instalaciones de la comandancia local, de la alcaldía y de ANTEL. Paralelamente a las operaciones militares, las acciones de sabotaje mantuvieron su ritmo. El 18 de febrero, unidades de zapadores dinamitaron y derribaron varias torres del tendido eléctrico ubicadas sobre la carretera Troncal del Norte, en Guazapa y Aguilares, afectando una extensa área de la zona norte del país. Otros grupos dañaron las líneas primarias de la subestación de Nejapa y las centrales hidroeléctricas 15 de Septiembre



y 5 de Noviembre, interrumpiendo el servicio de energía en el área metropolitana de San Salvador y en algunas poblaciones del interior.

A partir del 22 de febrero, el FMLN decretó su primer paro al transporte a nivel nacional en el año. Como en ocasiones anteriores, la Fuerza Armada intentó neutralizar el paro mediante la implementación del plan caminante, lanzándose a un intenso patrullaje de aire y tierra con efectivos de las brigadas de Infantería y de la Fuerza Aérea (FAS) sobre las carreteras Troncal del Norte, Litoral y Panamericana, mientras efectivos de los cuerpos de seguridad incrementaban sus acciones de rastreo en las zonas urbanas y especialmente en la capital. A la vez, el ejército puso en circulación unos 300 vehículos militares para cubrir las rutas de autobuses urbanos, y FIGAPE prestó unas 46 unidades de transporte colectivo con los mismos propósitos. Asimismo, en un intento por descoordinar a las fuerzas insurgentes en sus áreas de mayor persistencia e impedirles la movilización a carreteras, poblaciones u objetivos estratégicos, unidades de artillería efectuaron, entre el 23 y 24 de febrero, un intenso cañoneo sobre presuntas posiciones rebeldes en áreas de Suchitoto. Tras el bombardeo, la Fuerza Armada montó una operación con participación de unos mil efectivos apoyados por unidades de la FAS. Según voceros militares, las acciones castrenses lograron replegar al FMLN hacia cantones cercanos como Copapayo, Pepeistenango, Guadalupe, Tenango y otros.

Todo ello fue infructuoso para impedir la efectividad del boicot, el cual volvió a paralizar el transporte en casi un cien por ciento. El paro concluyó el 24, con un saldo de 4 personas muertas, 11 heridas, 5 vehículos ametrallados y 2 gasolineras incendiadas, según informes del COPREFA. En particular, los voceros oficiales resaltaron el atentado de que fue objeto un bus con trabajadores de IUSA, presuntamente ametrallado por el FMLN en las inmediaciones de San Martín.

No obstante, el FMLN negó categóricamente que sus unidades hubiesen perpetrado el atentado, acusando, a su vez, a soldados de la FAS que habrían actuado bajo los efectos de drogas y por órdenes superiores para desprestigiar a la guerrilla. La versión guerrillera recibió un apoyo indirecto de parte de vecinos del lugar, quienes atestiguaron que el sector había sido acordonado por efectivos gubernamentales pocas horas antes de que el bus fuera ametrallado. También la infraestructura del tendido eléctrico sufrió severos daños durante los días de paro. Según un reporte de la CEL, entre el 21 y 22, el FMLN sabotó 27 estructuras de cinco líneas de subtransmisión en los departamentos de Cabañas, Cuscatlán Usulután, San Miguel, San Vicente y San Salvador.

En lo que respecta al panorama regional, el mes de febrero constituyó el escenario de un relativo aletargamiento del proceso de Esquipulas II, pese al espaldarazo que le representó, el día 3, la votación efectuada en la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano, la cual rechazó, por 219 votos contra 211, la solicitud de Reagan para otorgar a los antisandinistas una nueva asistencia de 36.25 millones de dólares. El fallo de la cámara baja se produjo tras 10 horas de intenso y airado debate que puso fin a dos semanas de arduas gestiones del propio Reagan en favor de la aprobación de la ayuda. Aunque la Casa Blanca intentó disimular el golpe y aseguró que proseguiría por otros medios sus gestiones para financiar a los "contras", el resultado de la votación sembró considerable desasosiego entre los propios antisandinistas, al punto que representantes de unos 24 grupos sugirieron el 5 de febrero, en San José, la conveniencia de rendirse ante el gobierno de Nicaragua. Un portavoz contrarrevolucionario expresó que "si los estadounidenses quieren detener el comunismo en América Central, que vengan ellos, que pongan las armas y los muertos, porque ya los nicaragüenses nos sacrificamos demasiado y nos pagan con incompreensión."

No obstante el estímulo que la votación representó para la distensión regional, en conjunto el proceso de pacificación no prosperó demasiado. La quinta reunión de la comisión Ejecutiva de Esquipulas II, realizada en San Salvador el 17 de febrero, puso una vez más de manifiesto el empantanamiento de los acuerdos, pese a las declaraciones verbales de buena fe formuladas por los agentes involucrados en el conflicto regional. Adicionalmente, las relaciones diplomáticas entre Mé-

xico y El Salvador se volvieron muy tensas a raíz de una protesta enviada por el canciller salvadoreño a su homólogo mexicano, reiterándole la solicitud de expulsión del FMLN-FDR del territorio mexicano; aunado esto al agravamiento de la crisis política panameña, arroja nuevas sombras sobre el proceso de distensión regional, al debilitar aún más la presencia mediadora de Contadora en favor de la paz.

